



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00361-2005-PC/TC

ÁNCASH

MARÍA ALIDA SILVA TAMARA Y OTROS

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

#### ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Alida Silva Tamara y otros contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 169, su fecha 27 de setiembre de 2004, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento.

#### ANTECEDENTES

Con fecha 6 de febrero de 2003, los recurrentes interponen demanda de cumplimiento contra el Director Regional de Educación de Ancash y el Presidente del Gobierno Regional de Ancash, solicitando el cumplimiento de las Resoluciones Directorales Regionales N.º 01034, de fecha 4 de abril de 2002, N.º 00721, de fecha 6 de marzo de 2002, N.º 01216, de fecha 9 de abril de 2002, N.º 00907, de fecha 18 de marzo de 2002, N.º 00684, de fecha 5 de marzo de 2002, N.º 00141, de fecha 26 de enero de 2002, N.º 01059, de fecha 4 de abril de 2002, N.º 01138, de fecha 8 de abril de 2002, N.º 00512, de fecha 25 de febrero de 2002, N.º 00853, de fecha 13 de marzo de 2002 y N.º 00508, de fecha 25 de febrero de 2002, en virtud de las cuales se dispone abonar las cantidades de dinero allí especificadas por concepto de subsidio por luto y sepelio y gratificación por haber cumplido 20, 25 y 30 años de servicios. Refieren los demandantes que mediante Oficio N.º 510-2002-EF/76.15 de fecha 1 de abril de 2002 el Ministerio de Economía y Finanzas estableció que los referidos beneficios debían ser cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal de la propia Entidad, pese a lo cual las Entidades demandadas continúan siendo renuentes al pago de las mismas.

El Director Regional de Educación de Áncash contesta la demanda alegando que si a la fecha no se ha hecho efectivo los pagos reclamados por los actores, ello se debe a que la Dirección a su cargo no es la encargada de hacer efectivo el pago a los demandantes, sino lo es el Consejo Transitorio de Administración Áncash.

El Gobierno Regional de Áncash contesta la demanda manifestando que las pretensiones de los demandantes provienen de diversos títulos, por lo que la demanda debe declararse improcedente.





## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 22 de octubre de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que las resoluciones materia de cumplimiento contienen un mandato claro, concreto, preciso y específico que debe ser ejecutado según sus propios términos, por lo que al no haberse cumplido se ha demostrado la renuencia de la emplazada.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar que la ejecución de las resoluciones cuyo cumplimiento se solicita está sujeto a la aprobación de la ampliación del calendario de compromisos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

### FUNDAMENTOS

1. Con la carta notarial obrante a fojas 15, se acredita que los demandantes han cumplido con agotar la vía previa a que se refería el artículo 5°, inciso c), de la Ley N.º 26301, requisito hoy recogido en similares términos por el artículo 69° del Código Procesal Constitucional.
2. Los recurrentes solicitan se de cumplimiento a las resoluciones siguientes:
  - Resolución Directoral N.º 01034, de fecha 4 de abril de 2002, que dispone abonar a favor de doña María Alida Silva Tamara la suma de S/. 1,950.21 por haber cumplido 25 años de servicios.
  - Resolución Directoral N.º 00721, de fecha 6 de marzo de 2002, que dispone abonar a favor de doña Salustiana Cordova Hurtado la suma de S/. 2,259.51 por haber cumplido 25 años de servicios.
  - Resolución Directoral N.º 01216, de fecha 9 de abril de 2002, que dispone abonar a favor de don Lorenzo Hernán Julca Maldonado la suma de S/. 1,739.24 por haber cumplido 25 años de servicios.
  - Resolución Directoral N.º 00907, de fecha 18 de marzo de 2002, que dispone abonar a favor de don Lorenzo Hernán Julca Maldonado la suma de S/. 1,745.24 por concepto de reintegros por subsidios de luto y gastos de sepelio.
  - Resolución Directoral N.º 00684, de fecha 5 de marzo de 2002, que dispone abonar a favor de doña Gudelia Alejandrina Ardiles Alegre la suma de S/. 2,469.23 por haber cumplido 25 años de servicios.



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

- Resolución Directoral N.º 00141, de fecha 26 de enero de 2002, que dispone abonar a favor de doña Consuelo Doris Vega Cortabrazo la suma de S/. 1,867.42 por haber cumplido 20 años de servicios.
  - Resolución Directoral N.º 01059, de fecha 4 de abril de 2002, que dispone abonar a favor de don Epifanio Alberto Tinoco Cochachin la suma de S/. 406.21 por haber cumplido 30 años de servicios.
  - Resolución Directoral N.º 01138, de fecha 8 de abril de 2002, que dispone abonar a favor de doña Cenina Elva Usua Gonzales la suma de S/. 1,739.24 por haber cumplido 25 años de servicios.
  - Resolución Directoral N.º 00512, de fecha 25 de febrero de 2002, que dispone abonar a favor de doña Tomasa Paulina Huayaney Zarzosa la suma de S/. 3,556.32 por concepto de reintegros por subsidios de luto y gastos de sepelio.
  - Resolución Directoral N.º 00853, de fecha 13 de marzo de 2002, que dispone abonar a favor de doña Tomasa Paulina Huayaney Zarzosa la suma de S/. 1,672.66 por haber cumplido 20 años de servicios.
  - Resolución Directoral N.º 00508, de fecha 25 de febrero de 2002, que dispone abonar a favor de don Mercedes Gerardo Alvaron Castillo la suma de S/. 1,440.52 por haber cumplido 25 años de servicios.
3. En los fundamentos 14, 15 y 16 de la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 29 de setiembre de 2005, este Colegiado ha precisado los requisitos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que este sea exigible vía el proceso de cumplimiento. En consecuencia, dado que en el presente caso el mandato cuyo cumplimiento se exige satisface dichos requisitos, la demanda debe ser estimada.
4. Que, en la STC N.º 3149-2004-AC/TC, este Tribunal ha señalado que esta práctica constituye, además de un incumplimiento sistemático de las normas, una agresión reiterada a los derechos del personal docente, que genera la declaración del *Estado de Cosas Inconstitucional*, por “(...) constatarse (...) los comportamientos renuentes, sistemáticos y reiterados, de los funcionarios del CTAR Áncash, así como también de las autoridades del Ministerio de Educación, a la hora de atender los reclamos que se refieren a derechos reconocidos en normas legales correspondientes al personal docente, como es en el presente caso la ejecución de una resolución que declara un derecho concedido en la Ley del Profesorado y su reglamento a todos los docentes en los supuestos claramente establecidos”.



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

5. En relación a la Entidad obligada al pago de las obligaciones, es de señalar que a fojas 17 a 27 de autos, obran las resoluciones directorales regionales cuyo cumplimiento se solicita a través de la presente demanda, estableciéndose en el artículo 2° de todas ellas que el egreso que origine el beneficio reconocido en la resolución afectará el pliego presupuestal 441, correspondiente en la actualidad a la Región Áncash.
6. Asimismo, a fojas 42 de autos obra el Oficio Múltiple N.º 0711-2001-CTAR ANCASH/OTD a través del cual la Oficina de Trámite Documentario del CTAR Áncash comunica a la Dirección Regional de Educación de Áncash que “corresponde otorgar el subsidio por luto y gastos de sepelio a la Dirección Regional de Educación, Sub Regiones de Educación y USES, mediante Resolución, sobre las remuneraciones o pensiones totales percibidas por el docente a la fecha de deceso, efectuando los trámites correspondientes para su pago”.

En este sentido, las obligaciones en cuestión deberán ser pagadas por el referido pliego presupuestario, con cargo al Presupuesto de la hoy Región Áncash y de conformidad con la normativa correspondiente en materia de Presupuesto.

7. Sin perjuicio de lo anterior, a fojas 12 de autos, obra el Oficio N.º 510-2002-EF/76.15 a través del cual la Dirección Nacional de Presupuesto informa al CTAR Áncash lo siguiente:

“Al respecto, debo transmitirle la opinión autorizada que sobre la aplicación del antes citado Decreto Supremo, ha vertida la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, la misma que ha manifestado que para todos sus efectos, el mencionado Decreto Supremo debe aplicarse desde el día siguiente de su publicación, es decir, desde el 19 de junio de 2001, no debiendo en consecuencia, atenderse solicitudes de reintegros de años anteriores, por la modalidad de devengados.

Asimismo cabe indicar que las demandas adicionales de gasto que originen la atención del concepto antes mencionado y que no estén previstas en la Ley N.º 27753 – Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002, deberán ser cubiertas por el propio Pliego, en forma progresiva, tomando en cuenta el grado de prioridad en su ejecución y sujetándose a la disponibilidad de recursos del Presupuesto de la Entidad, en el marco de lo dispuesto por las Normas I y II del Título Preliminar de la Ley N.º 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria del Estado”.

En este sentido, y existiendo pronunciamiento del MEF en relación a los recursos presupuestarios con los que debía hacerse frente a las obligaciones de pago reconocidas en las resoluciones cuyo pago se exige a través de la presente demanda, resulta evidente



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

para este Tribunal, la renuncia de la autoridad regional para el cumplimiento de las obligaciones.

8. Asimismo, del texto del citado Oficio se desprende, la existencia de controversia en relación al otorgamiento de los beneficios a los demandantes lo cual a criterio de este Tribunal hace necesario –sin perjuicio de su pago a los demandantes– establecer judicialmente si efectivamente se trató de beneficios indebidamente otorgados, caso en el cual corresponderá a la Región Áncash y a las autoridades correspondientes tomar las acciones que correspondan a efectos de determinar los funcionarios que deberán asumir el costo de un eventual beneficio indebido otorgado y que en principio también involucraría a aquéllos renuentes a declarar la nulidad de la resolución en cuestión.

Ello, sin perjuicio de las demás responsabilidades que eventualmente pudieran establecerse en contra de los funcionarios que resulten responsables

9. En relación al pago de costos solicitado por los demandantes, es de señalar que el artículo 413° del Código Procesal Civil establece que están exentos de la condena de costas y costos los gobiernos regionales por lo que no corresponde su pago en el presente caso.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

**HA RESUELTO**

1. Declarar **FUNDADA** la demanda de cumplimiento.
2. Ordena que la Región Áncash cumpla con pagar los conceptos reconocidos en las resoluciones objeto de la presente demanda de cumplimiento con cargo a su propio Presupuesto y de conformidad con la normativa de la materia, sin costos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI  
BARDELLI LARTIRGOYEN  
LANDA ARROYO

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra  
SECRETARIO RELATOR (e)